

Coyhaique, a uno de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS Y OIDO:

En lo principal de la presentación de 13 de abril de 2021, Paulo Gómez Canales, Abogado Procurador Fiscal de Coyhaique, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva, de fecha 30 de marzo de 2021, dictada por don Félix Eduardo Asencio Hernández, Juez Subrogante del Juzgado de Letras y Garantía del Baker-Cochrane, en causa Rit T-1-2019, por la cual se acoge la demanda de vulneración de derechos fundamentales deducida por don Eduardo Ernesto Trinidad Gallardo, en contra de la Gobernación Provincial de Capitán Prat, Fisco de Chile, en cuanto la demandada y empleadora, incurrió en actos que significaron la lesión a la garantía constitucional y legal de la no discriminación, al término de la relación laboral, por lo que se condena a la demandada a pagar al demandante, la suma de \$10.830.050, por concepto de indemnización de 10 remuneraciones conforme al artículo 489 del Código del Trabajo, y, que, en todo lo demás, se rechaza la demanda; solicitando, en definitiva, se anule la sentencia recurrida y se dicte una sentencia de reemplazo que, aplicando acertadamente las reglas de la sana crítica, rechace la demanda en todas sus partes, por no haber existido vulneración alguna del derecho a no discriminación del artículo 2 del Código del Trabajo, con costas.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte recurrente fundamenta el recurso de nulidad alegando la causal establecida en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, “cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.”.

Al efecto señala que existe una transgresión a los principios de la lógica, y en particular, al principio de no contradicción, por cuanto el sentenciador afirma en el fallo que “El Señor Trinidad es militante del partido socialista”, obviando que el indicio planteado por la denunciante



sostiene que “El Señor Trinidad es un reconocido militante del Partido Socialista”, y que aquello sería la causa directa de su desvinculación. Sin embargo, igualmente afirma que: “Los testigos de la denunciante desconocen si el Señor Trinidad tenía la calidad de militante del Partido Socialista”. En tal sentido, lo que hizo el Sentenciador fue concluir, por un lado, que el Señor Trinidad tiene una militancia reconocida en un partido político, y por otro lado, que se desconoce su calidad de militante por personas cercanas a él. De modo tal que transgrede el principio de no contradicción porque no se puede concluir una y otra cosa, distinta, al mismo tiempo.

Indica que además existe una transgresión a los principios de la máxima de la experiencia, atendido a las premisas acreditadas por el sentenciador y utilizadas en su razonamiento inicial, en particular las referidas a que “El Señor Trinidad no acompañó certificado que acredite la calidad de militante del Partido Socialista” y a que “Testigo Jaime Reyes indica que el Señor Trinidad tiene la calidad de militante del Partido Socialista”, cabe advertir una vulneración flagrante a las máximas de la experiencia:

En primer lugar, se ha transgredido la máxima de experiencia consistente en que: “Para ser militante de un partido político hay que estar inscrito en dicho partido”. En efecto, la Ley N° 18.603 sobre Partidos Políticos, advierte sobre la necesidad de afiliación para contar con ciertos derechos y obligaciones partidarias. De este modo, el único razonamiento correcto al que pudo arribar el Sentenciador utilizando las máximas de la experiencia, es que el denunciante no acreditó su calidad de militante de un partido político y que, a su vez, sus propios testigos también desconocían tal calidad. Más aún, el único testigo que señala que el Señor Trinidad ostenta la calidad de militante del partido socialista, no da razón de sus dichos.

En segundo lugar, se ha transgredido la máxima de la experiencia: “La mayor o menor credibilidad de un testigo está asociada a la posibilidad de haber presenciado el hecho”. Lo anterior es relevante



dado que en la estructura de razonamiento inicial se consideró como gravitante el testimonio del Sr. Jaime Reyes, a pesar que el propio Tribunal tuvo por acreditado que dicho testigo solo trabajó en la Gobernación de Capitán Prat hasta mayo de 2018, en circunstancias que los hechos que motivaron la desvinculación ocurrieron con posterioridad a dicha fecha. En tal sentido, el Tribunal tuvo dicho relato en consideración para acreditar no solo la militancia del Sr. Trinidad, sino además para acreditar que la no renovación fue motivada por una discriminación política.

En tercer lugar, se ha transgredido la siguiente máxima de la experiencia: “Si una persona desempeñó funciones en un órgano bajo gobiernos de distinta coalición política y fue siempre calificado en Lista 1, es poco probable que su no renovación de contrata obedezca necesaria y suficientemente a razones políticas”. Lo anterior es del todo relevante, pues no se aprecia en el razonamiento del Sentenciador, alguna premisa que diga relación con esta máxima de la experiencia, así como tampoco se observa que se haga cargo de las afirmaciones que el propio Tribunal realiza.

Señala que, hubo un segundo razonamiento defectuoso: aquel que concluye que hubo más personas desvinculadas, uno de ellos un testigo de la denunciante, sin embargo, al explicar su razonamiento, en el considerando décimo cuarto numeral 4), el sentenciador se basó en el simple relato del testigo Jaime Reyes que señala que hubo otras personas desvinculadas por motivos políticos, entra ellas él mismo. Aun cuando advirtió que no había otros medios de prueba que permitan corroborar o descartar la verosimilitud de su declaración.

Indica que como consecuencia de los anterior, existió una transgresión a los principios de la lógica, y en particular, al principio de razón suficiente, toda vez que valora un único testimonio que no da razón de sus dichos, porque no presencié los hechos directamente y porque tiene sesgos que el Tribunal debió reconocer, más aún cuando se le advirtió por su parte, en la instancia de observaciones a la prueba,



que el testigo era imparcial por cuanto había demandado por las mismas razones a mi representado (SIC).

Igualmente, sostuvo que existe una transgresión a las máximas de la experiencia, en efecto, en su razonamiento judicial el Tribunal omitió que el testigo Sr. Reyes, que además es el único relato en el que se fundamenta su decisión de validez de hipótesis, señaló expresamente en la audiencia de juicio que había participado como testigo en, al menos, otras cuatro causas judiciales en sede laboral, todas bajo la creencia de que existía una persecución política por parte del Gobernación Provincial Capitán Prat, respecto de dichas personas y respecto de él mismo.

Refiere que hay un tercer razonamiento defectuoso: aquel que concluye que hubo dos testigos que declararon en juicio que entraron a trabajar con posterioridad al 11 de marzo de 2018 y reemplazaron a los que fueron desvinculados. De este modo, se aprecia que si bien el sentenciador da por acreditado que dos testigos ingresaron a desempeñarse en la Gobernación con posterioridad al cambio de coalición gobernante, en virtud de los relatos de los testigos Márquez y Escobar, concluye además, y sin tener ningún antecedente, que dichos testigos de esta parte habrían reemplazado a otros funcionarios desvinculados. Cuestión que evidencia una contradicción insalvable, con la propia máxima de la experiencia que él utiliza “No es posible establecer o descartar que hayan asumido el trabajo de una persona desvinculada”. Es más, de la lectura del fallo se advierte la presencia de una falacia de petición de principios, porque lo que hace el Sentenciador es presumir aquello que se debe probar: que aquellos dos testigos reemplazaron a los que fueron desvinculados.

SEGUNDO: Que, por su parte, el apoderado de la recurrida, en estrado, solicitó el rechazo del recurso, exponiendo, primeramente, que se establecieron ciertos hechos como no controvertidos, y que se debe tener presente el principio de confianza legítima atendido a que el denunciante trabajó 15 años en el servicio.



Señala que el Juez a quo hace un análisis, considerando las declaraciones de los testigos que fueron presentados por el Consejo de Defensa, donde efectivamente uno de éstos declaró de la militancia del demandante y no hubo otro testigo que dijera lo contrario, por tanto cuestionar al magistrado porque no consideró la opinión de otros testigos que dijeron que no tenían idea, que no sabían, por lo que el juez a quo solo puede valorar la prueba existente. Agrega que este por lo demás no es el único argumento que sostiene su parte para calificar la discriminación, dado que esta es una vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, pues en el motivo Vigésimo de la sentencia se establece que al acreditarse indicios el peso de la prueba pasa al empleador, y el sentenciador analiza todos los argumentos del despido, de acuerdo a lo que dice la norma, concluyendo que el primero que dice relación con costo de la dotación de personal excede el monto de las asignaciones contenidas para estos efectos en la ley de presupuesto, que existe una inconsistencia que, lejos de haberse explicado o rendido prueba sobre ello, se ve agudizada al constatar que, tal como fue acordado al definir los hechos pacíficos o no controvertidos, se contrató a una nueva persona para que desempeñará las funciones de auxiliar o encargado de servicios que prestaba el denunciante.

Luego, la parte recurrida, se limita a exponer y reproducir todos los argumentos en los que se basa la resolución por la que se pone término a la contrata del demandante, los cuales fueron analizados particularmente por el Juez en el referido considerando Vigésimo.

TERCERO: Que, entonces, el arbitrio de nulidad se sustenta en la causal prevista en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, “cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”.

CUARTO: Que, por su parte, el artículo 456 del Código del Trabajo dispone que: “El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.



Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.”

QUINTO: Que, de acuerdo a lo señalado por la doctrina y la jurisprudencia, las reglas de la sana crítica, son normas que deben interpretarse como aquéllas del correcto entendimiento humano en donde deben converger las reglas de la lógica y las de la experiencia y, de tal manera, ellas contribuyen a que el Juez pueda analizar la prueba de acuerdo a la sana razón y al conocimiento experimental de los casos. Pero el juzgador, no tiene la libertad de razonar discrecionalmente, a voluntad, ni arbitrariamente. Por su parte se ha señalado, también, que el conocimiento científico al que el Juez debe sujetar su accionar, es un saber racional, fundado, crítico, objetivo y verificable sobre la realidad, a la vez que racional.

Que, entonces, valorar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, requiere y obliga a que toda decisión del Juez debe encontrarse racionalmente legitimada y de ahí nace el deber del Tribunal de motivar debidamente su sentencia, expresándose los fundamentos y razones, tanto de hecho como de derecho en que se apoya lo que, a su vez, es una garantía para las partes, para obtener, en definitiva, una sentencia congruente, armónica y razonable y, de no ocurrir ello debe ser reparado jurídicamente a través de los recursos procesales existentes.

SEXTO: Que, por consiguiente, se desestimaré el presente arbitrio de nulidad, desde que no se advierte por estos sentenciadores la manera en que se han vulnerado las reglas de valoración de la prueba conforme a la sana crítica, en concreto, la lógica y las máximas de



experiencia, de acuerdo a los fundamentos que se expondrán a continuación.

SÉPTIMO: Que, al efecto el Juez a quo en base a la prueba rendida, arriba a la conclusión, en el motivo Vigésimo Primero del fallo recurrido, de que efectivamente, la decisión del término de la contrata del funcionario demandante, fue infundada, debido que aun cuando existe una resolución que contiene los argumentos, ellos no son aplicables al actor y carecen de sustento fáctico, y por lo tanto, al dictar la resolución de no renovación de la contrata el empleador obró más allá de sus propias atribuciones, alterando o desvirtuando el contenido de la ley, específicamente del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos, en relación a un funcionario que se desempeñaba en calidad de contrata, todo lo anterior no ha sido cuestionado por el presente recurso .

Desde luego, la configuración de la causal en estudio requiere que la infracción esté revestida de un carácter manifiesto, es decir, patente y claro, lo que no aparece del texto de la sentencia, ya que contiene conclusiones que no resultan alambicadas o arbitrarias, desde que ha tenido como base fundamental que se acreditaron los indicios postulados por la demandante como indicativos de eventual infracción a derechos fundamentales y, muy particularmente, discriminación por motivos políticos.

OCTAVO: Que, en este sentido y en términos generales, se puede sostener, que ante toda la prueba que fuera rendida y referida en la sentencia en estudio, el Tribunal concluyó, principalmente, en base a la declaración del testigo Jaime Humberto Reyes Velásquez que el demandante, Eduardo Trinidad Gallardo es militante del Partido Socialista y que hubo más personas que fueron desvinculadas por razones políticas, fundamentando al respecto que si bien es efectivo que no se acompañó un certificado con tal calidad, dicho hecho fue afirmado por el referido testigo, limitándose algunos de los testigos de la demandada simplemente a señalar desconocer si es que el demandante



tenía tal calidad, y, es así, que el sentenciador expresamente dejó constancia que los testimonios no contradicen, ni son incompatibles con lo que afirma el Sr. Reyes, desde que si bien es el único testimonio que da cuenta de la existencia de otras desvinculaciones, tampoco existe otro medio de prueba que lo descarte; de tal manera que no se visualiza una transgresión a los principios de la lógica, y en particular, al principio de no contradicción, como aduce la recurrente.

NOVENO: Que, aparte de la declaración del testigo a que se hizo referencia precedentemente, también se agregaron otras probanzas de las que el Juez a quo se hizo cargo, lo que le permitió concluir en el motivo Décimo Cuarto del fallo recurrido, que el actor justificó los indicios atribuidos a la parte demandada, como evidencia de la vulneración de derechos fundamentales, brindando razones suficientes para ello, siendo la militancia política solo uno de ellos, incluso, en el considerando Vigésimo, analiza cada uno de los motivos contenidos como fundamento de la no renovación de la contrata de la Resolución 7004/2018, estimando al efecto que la decisión del término de la contrata del funcionario demandante, fue infundada, vulnerándose, en consecuencia, el principio de confianza legítima respecto a la renovación de su contrata, por haber permanecido un largo tiempo en su cargo, que justamente es el caso de marras.

De esta manera, lo cierto es que la sentencia se fundó en los elementos de pruebas existentes y haciendo uso el Tribunal de las facultades de apreciación de las pruebas que la ley le entrega, que son exclusivas del sentenciador y sin que aparezca se haya vulnerado las reglas que norman el procedimiento laboral, pudiéndose apreciar que, en realidad, lo que se pretende con el presente recurso de nulidad, mediante la causal que se analiza, es modificar o enmendar una sentencia a través de una apreciación de los hechos de una manera distinta a como lo consideró el Tribunal, por lo que el recurso de nulidad interpuesto no puede prosperar, no observándose, como lo estima la recurrente en su recurso, se haya vulnerado la lógica y las máximas de



experiencia y, por ende, que la sentencia dictada haya sido pronunciada con infracción de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, infracción que, por lo demás, debe ser manifiesta, notoria, lo que en autos no se produjo.

DÉCIMO: Que, en lo particular del recurso, esta Corte sostiene que no resulta defectuoso el razonamiento del juez a quo al concluir que el demandante es militante del Partido Socialista, como contrariamente lo ha expuesto el recurrente como primer argumento de su recurso, ya que la sentencia recurrida brinda las razones de por qué lo estima probado, señalando precisamente que se sustenta en un testigo, Jaime Reyes, que lo declaró de ese modo, otorgándole validez por cuanto no ha sido contradicho por otros testigos, desde que éstos solamente indicaron desconocer tal circunstancia, sumado a que el fallo sostiene que este hecho tampoco se ha cuestionado o discutido, salvo en las observaciones a la prueba.

No se observa una infracción manifiesta a la lógica, específicamente el principio de no contradicción, por el hecho de que se haya propuesto por el demandante el indicio de que éste fuera un “reconocido” militante, y el juez haya establecido que se probó que solamente era militante del Partido Socialista, ya que el razonamiento para establecer este hecho no resulta contradictorio en sí mismo, otra cosa es que difiera textualmente de lo propuesto por el actor, aunque sigue la misma idea que sea un militante y, por cierto, no se tuvo por probado que era un “reconocido” militante, como lo indica el recurrente.

Tampoco resulta contradictorio, el hecho que el fallo recurrido haya sostenido que no se haya acreditado fehacientemente una discriminación política hacia el actor, para después afirmar que se acreditaron los indicios indicativos de una discriminación política, ya que la sentencia detalla y explica, acertadamente, que el legislador no exige una acreditación completa del supuesto de hecho de discriminación sino un estándar más bajo, consistente en la existencia de indicios que



exigen acreditar verosimilitud del relato, a fin de trasladar la prueba a la demandada.

Asimismo, el recurrente sostiene que se ha infringido la máximas de experiencia que señala que para ser militante de un partido político hay que estar inscrito en dicho partido y considera que si el fallo estableció que el actor no acompañó el certificado que acredite tal calidad, el único razonamiento correcto que pudo arribar el sentenciador es que el denunciante no acreditó su calidad de militante de un partido político, máxime si el único testigo que así lo afirma, no da razón de sus dichos; afirmación ésta que no comparte esta Corte, ya que prácticamente el recurrente plantea que solamente se puede acreditar la militancia en un partido político por el certificado respectivo, lo que no se aviene con la especial forma de ponderación de la prueba conforme a la sana crítica, por lo que no resulta infraccionada la premisa del recurrente, al tenerse por probado el hecho en cuestión con la sola declaración del testigo Jaime Reyes, otorgándole credibilidad por no haber prueba que la contradiga ni haberse controvertido especialmente en los escritos de discusión.

De modo que la crítica que plantea el recurrente, en cuanto a que el testigo no dio razón suficiente, no presencié los hechos que motivaron el despido y que no se aprecia un razonamiento respecto a la máxima de experiencia de que si el demandante se desempeñó laboralmente bajo distintos gobiernos y calificado en Lista 1, es poco probable que la no renovación de contrata obedezca a razones políticas; debe ser desestimada, ya que estos reparos aparecen más bien asociados a motivos de apelación, por no estar conforme con el mérito de lo considerado por el juez a quo.

UNDÉCIMO: Que el recurrente sostiene un segundo razonamiento defectuoso en la sentencia recurrida, consistente en que concluyó que hubo más personas desvinculadas por cuestiones políticas y uno de ellos es el testigo del denunciante, infringiendo la lógica y la razón suficiente, ya que se valora al único testigo Jaime Reyes, que no



da razón de sus dichos, no presencié los hechos y tenía sesgos por cuanto había accionado judicialmente por las mismas razones al demandado; cuestiones éstas que atacan el mérito de lo considerado por el sentenciador, ya que éste le da valor al único testimonio antes referido, por cuanto no ha sido controvertido por prueba en contrario, siendo aquella circunstancia objeto a probar al tenor del punto N°1 de prueba; destacando el fallo recurrido que se desvinculó al demandante por razones políticas, al igual que al testigo, en su caso por ser militante del Partido Radical Social Demócrata, indicando lo expuesto por el deponente, con detalle y precisión, respecto a cuatro personas más, con nombre, apellido y partido político al que pertenecen, precisando que fueron desvinculadas por tal motivo, de modo que el juez a quo dio razón suficiente de ello, sumado a que la circunstancia de tener otras cuatro procesos en sede laboral, por los mismos fundamentos de la presente causa, no es basamento de máxima experiencia para estimar que hay mayor probabilidad de que su relato sea parcial, como lo indica la recurrente, desde que simplemente ello ratifica que presencié los hechos y está dando cuenta de ellos, sin que aparezcan ganancias o intereses secundarios para el testigo.

DUODÉCIMO: Que, finalmente sostiene el recurrente que hay un tercer razonamiento defectuoso, en cuanto el juez a quo concluye que hubo dos testigos que declararon en juicio que entraron a trabajar con posterioridad al 11 de marzo de 2018 y reemplazaron a los que fueron desvinculados; lo que deberá desestimarse, desde que de un atenta lectura del N°3 del Considerando Décimo Cuarto del fallo que se revisa, el juez solamente establece que “es posible tener por acreditado con los testimonios del Sr. Escobar y de la Sra. Márquez que ellos llegaron a desempeñar funciones a la Gobernación de Capitán Prat dentro de los 2 o 3 meses posteriores al cambio de gobierno”, sin establecer que hayan asumido el trabajo de una persona desvinculada, refiriendo, al inicio del N°3 antes indicado, a lo que dijeron los testigos, por lo que no se advierte infracción a la lógica, por derivación ni



contradicción, ni a las máximas de experiencia, como sostiene la recurrente.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, no habiéndose configurado la causal de nulidad prevista en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, en los términos expuestos por el recurrente, se deberá rechazar el presente recurso de nulidad, según se dirá.

Y teniendo, además, presente las disposiciones legales citadas, artículos 474, 477, 479, y 482, todos del Código del Trabajo, **SE DECLARA:**

Que, **SE RECHAZA**, con costas, el recurso de nulidad interpuesto por el Fisco de Chile, Gobernación Provincial de Capitán Prat, parte demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada por don Félix Eduardo Asencio Hernández, Juez Subrogante del Juzgado de Letras y Garantía del Baker-Cochrane, con fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, por la cual se acoge la demanda de vulneración de derechos fundamentales deducida por don Eduardo Ernesto Trinidad Gallardo, en contra de la Gobernación Provincial de Capitán Prat, Fisco de Chile, fundado en la causal de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, decidiéndose, en consecuencia, que ésta no es nula.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol Único de Causa N° 19- 4-0173207-4.

Rol I. Corte N°17-2021.





LJXFJWFWRJ

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Ministra Presidente Natalia Rencoret O. y los Ministros (as) Sergio Fernando Mora V., Jose Ignacio Mora T., Pedro Alejandro Castro E. Coyhaique, uno de julio de dos mil veintiuno.

En Coyhaique, a uno de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

